

1. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a) El silencio tendrá efecto desestimatorio.
- b) El inicio será siempre a solicitud del interesado.
- c) Tras iniciar el procedimiento de oficio, se requerirá informe a la unidad causante del daño.
- d) La propuesta de resolución deberá ser motivada.

2. En el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

- a) Será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
- b) No puede iniciarse de oficio este tipo de procedimientos.
- c) El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados
- d) El acuerdo de iniciación se notificará a la unidad causante del daño.

3. Indique la respuesta más correcta. El inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá ser:

- a) A solicitud del interesado, de oficio o por petición razonada de otros órganos.
- b) A solicitud del interesado o por petición razonada de otros órganos.
- c) Únicamente a solicitud del interesado.
- d) De oficio o por petición razonada de otros órganos.

4. El derecho a reclamar de los interesados:

- a) No prescribe.
- b) Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
- c) Prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- d) En cualquier caso, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance del daño.

5. Durante la instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
- b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 20.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
- c) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Ministerio Fiscal, que será evacuado en el plazo máximo de tres meses.
- d) Todas las anteriores son correctas.

6. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial:

- a) Será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda.
- b) Previamente a la resolución será necesario el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
- c) La resolución únicamente requerirá el informe del servicio causante del daño, además de los trámites generales del Capítulo IV del Título IV de la Ley 39/2015.
- d) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

7. Indique cuál de los siguientes no es un principio de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- a) Sólo podrán ser indemnizados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
- b) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
- c) Sólo constituyen infracciones administrativas indemnizables las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- d) los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

8. En relación a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la anulación de los actos o disposiciones administrativas:

- a) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, siempre que se produzca en vía administrativa y por el orden jurisdiccional.
- b) Presupone derecho a la indemnización, bastando que se produzca por el orden jurisdiccional.
- c) No presupone derecho a la indemnización, cuando se produzca por vía administrativa, y si lo presupone si se produce por el orden jurisdiccional.
- d) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización, se produzca por vía administrativa o por el orden jurisdiccional.

9. En relación con la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, indique la contestación incorrecta:

- a) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
- b) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.
- c) La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
- d) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en el Título I Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

10. Indique la opción más correcta. En relación a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas:

- a) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- b) la Administración exigirá de oficio en vía administrativa a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
- c) Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
- d) Todas las anteriores son correctas.

11. Cuál de los siguientes trámites no formará parte del procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las administraciones a sus autoridades y demás personal a su servicio:

- a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
- b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
- c) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- d) Solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

12. Corresponde al Pleno de las Entidades Locales:

- a) La aprobación inicial de las Ordenanzas Locales, de los Bandos, y la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo a la aprobación inicial de las Ordenanzas.
- b) La aprobación de los Bandos, la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo a la aprobación inicial de las Ordenanzas, y La aprobación inicial de las Ordenanzas Locales, de los Bandos, y la aprobación definitiva de las Ordenanzas Locales.
- c) La aprobación inicial y definitiva de las Ordenanzas Locales.
- d) Ninguna de las anteriores.

13. Qué tramite no corresponde a la aprobación de las Ordenanzas Municipales:

- a) Dictamen del órgano (Comisión Informativa) que tenga atribuida la función de estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la consideración del Pleno.
- b) Aprobación inicial por la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.
- c) Trámite de información pública y audiencia a los interesados, por plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
- d) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

14. Son entidades locales:

- a) El municipio, la provincia y la isla.
- b) El municipio, la isla y las áreas metropolitanas.
- c) El municipio, las mancomunidades de municipios y las comarcas.
- d) Todas las anteriores son correctas.

15.Cuál de las siguientes potestades no corresponde a las entidades locales territoriales:

- a) Las potestades de seguridad pública y de ordenación de recursos.
- b) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.
- c) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
- d) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

16. La Ley de Procedimiento Administrativo 39/2015, señala en su artículo 116 que será causa de inadmisión de recurso:

- a) Ser competente el órgano administrativo. El recurso deberá remitirse al órgano responsable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
- b) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano incompetente correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

- c) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
- d) Ser competente el órgano administrativo y estar en plazo para la interposición del recurso.

17. De acuerdo con la Ley 7/2011 de 1 de Abril de la Generalidad, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana, artículo 22, el personal operativo de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se estructura en escalas y categorías, la categoría de “operador de comunicaciones” corresponde a la escala de:

- a) Escala básica
- b) Escala de mando
- c) Escala de control
- d) Escala de inspección

18. El artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice:

- a) Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, no es suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad.
- b) Para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, con carácter particular, deberá acreditar previamente su identidad sólo a través de un DNI.
- c) Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en esta Ley.
- d) Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será insuficiente que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos.

19. En relación con la comparecencia de las personas en las oficinas públicas, el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dice que:

- a) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente sólo fecha y hora, así como los efectos de no atenderla.
- b) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
- c) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente sólo el objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
- d) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, no procede en ningún caso.

20. El artículo 25 nos habla sobre la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio:

- a) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado resolución no exime al responsable del Departamento del cumplimiento de la obligación de notificarlo.
- b) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

c) En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

d) En los procedimientos iniciados de oficio, y transcurridos tres meses del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

21. De acuerdo con la ley 10/2010, de 9 de julio, artículo 142, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.”El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo” será considerada una falta clasificada como:

- a) Leve
- b) Muy grave
- c) Grave
- d) No se considera una falta

22. De acuerdo con la Ley 7/2011 de 1 de Abril de la Generalidad, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana, artículo 22, el personal operativo de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento se estructura en escalas y categorías, la categoría de “suboficial” corresponde a la escala de:

- a) Escala de inspección
- b) Escala de mando
- c) Escala de control
- d) Escala de estrategia

23. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/2011, La división territorial del servicio se estructura, de menor a mayor, en las siguientes unidades:

- a) Parque, Zona operativa y Área
- b) Área, Parque, Zona operativa
- c) Zona operativa, Parque y Área
- d) Parque Central, Parque de Zona y Área

24. En el artículo 59 de la Ley 7/2011, se hace referencia a la Prescripción de infracciones:

- a) Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años, las infracciones graves a los tres años y las leves al año.
- b) Las infracciones muy graves, graves y leves prescriben a los tres años.
- c) Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años, las infracciones graves a los tres años y las leves a los seis meses.
- d) Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las infracciones graves a los dos años y las leves a los seis meses.

25. El personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las administraciones públicas tendrá la condición de:

- a) Funcionario de administración general, servicios especiales, extinción de incendios, en los términos que establece la presente ley y demás legislación en materia de función pública.
- b) Funcionario de administración especial, servicios especiales, extinción de incendios, en los términos que establece la presente ley y demás legislación en materia de función pública.
- c) Funcionario de administración especial, servicios especiales, extinción de incendios, en los términos que establece la ley de procedimiento administrativo.
- d) Personal laboral fijo, servicios especiales, extinción de incendios, en los términos que establece el Estatuto de los trabajadores.

26. En su reglamento orgánico, artículo 77, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia, establece las clases de sesiones de la Junta de Gobierno:

- a) Ordinarias, Extraordinarias, y Extraordinarias de carácter urgente
- b) Ordinarias y Urgentes
- c) Ordinarias y Extraordinarias
- d) Normales y Extraordinarias

27. El artículo 79 del reglamento orgánico del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia dice: “En primera convocatoria se considerará legalmente constituida la Junta de Gobierno...”:

- a) Siempre que estén presentes las dos terceras partes de sus miembros
- b) Siempre que estén presentes las tres terceras partes de sus miembros
- c) Siempre que estén presentes la mitad de sus miembros
- d) Siempre que estén presentes todos sus miembros

28. El órgano supremo de Gobierno del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia será la Asamblea General,

- a) Compuesta por varios representantes de Generalidad, y el Presidente/a del Consorcio.
- b) Compuesta por una persona representante de cada uno de los municipios consorciados designado por el Pleno de éste, una persona representante de la Generalidad, y el Presidente/a del Consorcio.
- c) Compuesta por una persona representante de cada uno de los municipios consorciados mayores de 20.000 habitantes, una persona representante de la Generalidad, y el Presidente/a del Consorcio.
- d) Compuesta por una persona representante de cada uno de los municipios consorciados menores de 20.000 habitantes, una persona representante de la Generalidad, y el Presidente/a del Consorcio.

29. La modificación de los Estatutos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia se podrá iniciar mediante un acuerdo de:

- a) La Junta de Gobierno
- b) El Presidente/a y el Secretario/a del Consorcio
- c) La Asamblea General

d) El presidente/a de la Diputación y la Asamblea General

30. La Junta de Gobierno del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia estará formada por:

a) El Presidente/a, seis representantes de municipios consorciados designados por el Presidente/a, la persona titular de la Gerencia, el Secretario/a y el Interventor/a.

b) El Presidente/a, el vicepresidente/a, siete representantes de municipios consorciados designados por el Presidente/a, la persona titular de la Gerencia, el Secretario/a y el Interventor/a.

c) El Presidente/a, el vicepresidente/a, seis representantes de municipios consorciados designados por el Presidente/a, la persona titular de la Gerencia, el Secretario/a y el Interventor/a.

d) El Presidente/a, el vicepresidente/a, seis representantes de municipios consorciados designados por el Presidente/a, el Secretario/a y el Interventor/a.

31. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con las ordenanzas fiscales:

a) Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

b) Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante veinte días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

c) Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

d) Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante quince días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

32. En relación con los ingresos de derecho privado señala la respuesta correcta:

a) Se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros se hallen afectos al uso o servicio público.

b) Tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.

c) Se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público.

d) No tendrán la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa.

33. Contra las resoluciones en materia de tributos locales y demás ingresos de derecho público cabe:

a) Recurso de reposición con carácter preceptivo salvo que se trate de Municipios de gran población donde tendrá carácter potestativo.

b) Recurso de reposición en cualquier caso.

c) Recurso económico administrativo con carácter preceptivo salvo que se trate de Municipios de gran población donde tendrá carácter potestativo.

d) No cabe recurso alguno.

34. Las Entidades Locales:

a) Para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales aplicarán lo prevenido en la Ley General Tributaria con carácter supletorio a la propia normativa local.

b) Para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales aplicarán lo prevenido en la Ley General Tributaria y sus disposiciones de desarrollo si así lo disponen sus respectivas ordenanzas fiscales.

c) Aplicarán lo prevenido en las ordenanzas fiscales en lo referente a la gestión y liquidación. En cuanto a la recaudación e inspección se regirán únicamente por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

d) Para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos locales aplicarán lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

35. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios prestados o realización de actividades administrativas de:

a) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.

b) Protección civil.

c) Servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio y la cesión del uso de maquinaria y equipo adscritos a estos servicios, tales como escalas, cubas, motobombas, barcas, etcétera.

d) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.

36. ¿Cuál de los siguientes no son motivos de resolución de los contratos del sector público?

- a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
- b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
- c) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 6 meses.
- d) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a un año.

37. Respecto al principio contable de devengo señale la afirmación correcta:

- a) Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. Si no pueden identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.
- b) Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente monetaria de bienes y servicios que los mismos representan. Si no pueden identificarse claramente la corriente monetaria de bienes y servicios se reconocerán los gastos o los ingresos, o el elemento que corresponda, cuando se produzcan las variaciones de activos o pasivos que les afecten.
- c) La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos.
- d) La imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función de la corriente monetaria de bienes y servicios que los mismos representan. Si no puede identificarse claramente la corriente monetaria de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos.

38. La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado:

- a) No podrá exceder de 40 años.
- b) No podrá exceder de 20 años. No obstante, cuando por razón de la prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública se regirán por los plazos establecidos para las concesiones.
- c) No podrá exceder de 10 años. No obstante, cuando por razón de la prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el régimen aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública se regirán por los plazos establecidos para las concesiones.
- d) No podrá exceder de 15 años.

39. Respecto a la aprobación de la cuenta general señale la afirmación correcta:

- a) Es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.
- b) Es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella y genera responsabilidad por razón de las mismas.

c) Acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada el día 1 de octubre.

d) Acompañada de los informes de la Intervención y de las reclamaciones formuladas, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

40. El TRLCSP establece una serie de contratos que no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado. Señalar en este caso el tipo de contrato que sí puede estar sujeto a regulación armonizada:

a) Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los organismos de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de radiodifusión.

b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia.

c) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.

d) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y edificios de uso administrativo.

41. Podrán generar crédito en los estados de gasto de los presupuestos de las entidades locales los ingresos:

a) De naturaleza tributaria derivados de la prestación de servicios.

b) De naturaleza no tributaria derivados de la enajenación de bienes de la entidad local.

c) De naturaleza tributaria derivados del establecimiento de tasas municipales.

d) De naturaleza no tributaria derivada de operaciones de crédito.

42. Indique la alternativa correcta respecto al régimen de reclamaciones y recursos contra el presupuesto:

a) La interposición de recursos suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

b) La interposición de recursos suspenderá por sí sola la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación cuando el recurso se refiera a la nivelación presupuestaria.

c) Contra la aprobación provisional del Presupuesto podrán presentarse reclamaciones durante el plazo de un mes, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del Edicto.

d) Podrán presentarse reclamaciones contra el presupuesto por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

43. De acuerdo con la estructura presupuestaria de los estados de gastos, en los créditos para gastos corrientes:

a) Se incluirán los de funcionamiento de los servicios, las transferencias corrientes y de capital

y los intereses.

b) Se incluirán únicamente los gastos de personal, los de intereses y los gastos de mantenimiento de las inversiones reales.

c) Se incluirán únicamente los de personal, los de intereses y las transferencias corrientes.

d) Se incluirán los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.

44. El RD 500/1990 dispone que los Presupuestos Generales de las Entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:

a) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus Organismos autónomos, y los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

b) Las obligaciones que, como máximo, prevean reconocer la entidad y sus Organismos autónomos, y los derechos que puedan liquidar durante el correspondiente ejercicio.

c) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus Organismos autónomos, y los recursos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio.

d) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad y sus Organismos autónomos, y los derechos que prevean recaudar durante el correspondiente ejercicio.

45. Señale la opción correcta:

a) La disposición o compromiso es un acto sin relevancia jurídica para con terceros.

b) Las fases de Autorización, Disposición, Reconocimiento de la obligación y Ordenación del pago pueden acumularse en un solo acto.

c) Corresponderá al Presidente de la Entidad local o al órgano facultado estatutariamente para ello, en el caso de los Organismos Autónomos dependientes, el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos.

d) Corresponde al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito o concesiones de quita y espera.

46. Requisitos de los actos administrativos. Motivación:

a) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.

47. Según el Artículo 40 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, no deberá contener el texto íntegro de la resolución, únicamente se indicará si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el

plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, no deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

48. Según el Artículo 42 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

b) Todas las notificaciones que se practiquen en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

c) Todas las notificaciones que se practiquen en papel no podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.

d) Ninguna notificación que se practique en papel podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante.

49. Según el Artículo 118 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

a) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.

b) Se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado.

c) Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.

d) El recurso, los informes y las propuestas tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. También lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

50. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, el artículo que regula la Revocación de actos y rectificación de errores es:

- a) El artículo 103.
- b) El artículo 105.
- c) El artículo 107.
- d) El artículo 109.

51. Según el Artículo 41 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

- a) Siempre efectuarán por medios electrónicos aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Se efectuará por medios electrónicos cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
- c) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los supuestos establecidos.
- d) Se efectuará por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

52. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

- a) Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
- b) Los mayores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico.
- c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
- d) Exclusivamente las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

53. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, el trámite de audiencia:

- a) Se prescindirá siempre del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- c) No se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- d) No habrá trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el

interesado.

54. Según el Artículo 83 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, sobre Información Pública, establece que:

- a) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, acordará un período de información pública.
- b) La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
- c) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.
- d) Se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

55. Según el Artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, sobre la Obligación de resolver:

- a) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses.
- b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses.
- c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de un mes.
- d) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 20 días.

56. Según el Artículo 24 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:

- a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
- c) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo no se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
- d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación alguna al sentido del silencio.

57. Según el Artículo 122 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

- a) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
- b) El plazo para la interposición del recurso de alzada será de seis meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.

d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.

58. Según el Artículo 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de seis meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

b) Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.

d) Contra la resolución de un recurso de reposición interponerse de nuevo dicho recurso.

59. Según el Artículo 96 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común:

a) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.

b) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de quince días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

c) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

d) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de diez días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

60. Según el Artículo 52 de la Ley 39, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

a) La Administración no podrá convalidar los actos anulables, ni subsanar los vicios de que adolezcan.

b) El acto de convalidación siempre producirá efecto desde su fecha.

c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

61. Según el art. 63.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, las Administraciones Públicas Locales de la Comunitat Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de:

- a) Coordinación, cooperación, colaboración y eficacia.
- b) Coordinación, cooperación y colaboración.
- c) Coordinación, cooperación, colaboración, lealtad institucional y eficacia.
- d) Coordinación, cooperación, colaboración, lealtad institucional y respeto mutuo a las competencias compartidas.

62. De acuerdo con el art. 66.2 del citado Estatuto, la Generalitat, mediante una Ley de les Corts, podrá transferir o delegar en las Diputaciones Provinciales la ejecución de:

- a) Aquellas competencias que no sean de interés pleno de la Comunitat Valenciana.
- b) Aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- c) Aquellas competencias que no sean de interés propio de la Comunitat Valenciana.
- d) Aquellas competencias que no sean de interés compartido con otras Comunidades Autónomas.

63. El art. 66.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, dispone que las Diputaciones Provinciales actuarán como instituciones de la Generalitat y estarán sometidas a la legislación, reglamentación e inspección de ésta, en tanto:

- a) Que se ejecutan competencias transferidas por la misma.
- b) Que se ejecutan competencias exclusivas del Estado.
- c) Que se ejecutan competencias delegadas por la misma.
- d) El supuesto planteado no es posible.

64. Según el art. 137 de la Constitución Española (CE), el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de:

- a) Autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- b) Autonomía plena para la gestión de sus respectivos intereses.
- c) Autonomía propia para la gestión de sus respectivos intereses.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

65. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 141.1 de la CE, la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades:

- a) De la correspondiente Comunidad Autónoma.
- b) De la correspondiente Comunidad Autónoma y del Estado.
- c) De la correspondiente Comunidad Autónoma, del Estado y Corporaciones supramunicipales.
- d) Del Estado.

66. Teniendo en cuenta el art. 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

- a) Los montes y aprovechamientos forestales.
- b) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
- c) Administración de Justicia.
- d) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

67. De acuerdo con el art. 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en el ámbito de las funciones públicas de Policía, Seguridad y Resguardo Aduanero, la citada Ley:

- a) Formará la normativa única que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
- b) Inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
- c) Conformará el cuerpo básico legislativo para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

68. Según lo dispuesto en el art. 4 de la LPRL, se consideran «daños derivados del trabajo»:

- a) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión de un accidente de trabajo.
- b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión de una enfermedad profesional.
- c) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- d) Dependerá de la tipología del accidente.

69. El art. 4 de la LPRL establece que se entenderá como “condición de trabajo” cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.

De acuerdo con el citado artículo, quedan específicamente incluidas en esta definición (marque la respuesta incorrecta):

- a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
- b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
- c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
- d) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

70. El art. 14.2 de la LPRL, dispone que el empresario desarrollará una acción de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes. Dicha acción será:

- a) Complementaria del Plan de Prevención.
- b) General o complementaria dependiendo de la actividad de la empresa.
- c) Permanente.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

71. De acuerdo con el art. 3.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el personal funcionario de las entidades locales se rige por:

- a) Las disposiciones del EBEP que le resulte directamente de aplicación cuando así lo disponga su legislación específica.
- b) La legislación estatal y autonómica correspondiente.
- c) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el propio EBEP y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.
- d) Por la legislación específica propia y las normas convencionalmente aplicables por los preceptos del EBEP que así lo dispongan.

72. El art. 10 del EBEP, en su apartado 5 establece que a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición:

- a) El régimen general de los empleados públicos.
- b) El régimen general de los funcionarios de carrera.
- c) El régimen general de los funcionarios públicos.
- d) El régimen general regulador del correspondiente programa de carácter temporal.

73. De acuerdo con el art. 12.3 del EBEP, el cese del personal eventual tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca:

- a) El de la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento.
- b) El de la autoridad de la que se dependa orgánicamente.
- c) El de la autoridad de la que se dependa orgánica y funcionalmente.
- d) El de la autoridad que efectuó el correspondiente nombramiento.

74. Según el art. 70.1 del EBEP, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta:

- a) Un 7% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.
- b) Un 2% adicional fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.
- c) Un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.
- d) Un 3% adicional fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

75. De acuerdo con el art. 80.4 del EBEP, los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados:

- a) Automáticamente.
- b) Discrecionalmente.
- c) Excepcionalmente.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

76. No es una competencia propia del municipio:

- a) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- d) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.

77. El artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice:

- a) Se podrá acordar, sólo de oficio, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- b) Se podrá acordar, sólo a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- c) Se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- d) Se podrá acordar, de oficio y a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

78. Según el Artículo 39 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas:

- a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten.
- b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- c) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto y éste supeditada a su notificación.
- d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por los órganos administrativos, del que dependan jerárquicamente.

79. Según lo dispuesto en el art. 9.2 del EBEP, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente:

- a) A los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
- b) A los empleados públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
- c) Al Personal Directivo, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
- d) A los Directores de los diferentes órganos funcionales o servicios departamentales, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

80. Entre la documentación complementaria que deben acompañar las entidades locales a la Cuenta General se encuentra:

- a) Las Cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital tenga participación la entidad local.
- b) En caso que el Pleno de la Corporación así lo haya establecido se acompañará una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- c) Los municipios con población superior a 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos.
- d) Los municipios con población superior a 20.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior acompañarán una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos.